

**C/ JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
NEGATIVA INJUSTIFICADA A PRACTICARSE
EXAMEN DE ALCOHOLEMIA
PORTE O TENENCIA ILEGAL
DE MUNICIONES O CARTUCHOS
ARTÍCULO 196 INCISO 1º Y 195 BIS DE LA LEY 18.290
ARTÍCULO 9º DE LA LEY 17.798
RUC 1800518384-3
RIT 50 - 2020
CÓDIGO DELITO: 14052-14005-10011/**

Chillán, tres de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Tribunal e intervinientes.* Que durante los días 27 y 28 de abril último, ante esta Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, integrada por los jueces titulares María Paz González González, quien la presidió, Jorge Muñoz Guíñez, como integrante y Oscar Ruiz Paredes, como redactor, se llevó a efecto el juicio oral para conocer de la acusación dirigida en contra de **JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ**, cédula nacional de identidad N°12.197.779-6, de 48 años, obrero forestal, domiciliado en Calle Balmaceda, Población Pablo Neruda N° 1030, Quirihue.

El acusado estuvo representado por la Defensoría Penal Pública, abogado Miguel Vargas Palma, domiciliado en Independencia N°583, Quirihue.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por la fiscal Gloria González Figueroa, domiciliada en José Joaquín Pérez N°398, Quirihue.

SEGUNDO: *Acusación.* Que, los hechos materia de la **acusación fiscal**, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, fueron los siguientes:

“HECHO N°1: El día 06 de mayo de 2018 a las 02:00 horas aproximadamente, en la intersección de calle Maipú y Las Heras, de la comuna de Quirihue, el acusado JUAN ANTONIO LOYOLA VASQUEZ, conducía el vehículo marca Nissan, PPU TZ-8228, momentos en que fue fiscalizado por personal policial, quienes constataron su fuerte halito alcohólico, incoherencia al hablar y rostro congestionado.

Practicado el examen de alcoholemia de rigor, arrojó como resultado que el acusado LOYOLA VASQUEZ conducía en estado de ebriedad con 2.47 gramos de alcohol por litro de sangre.

HECHO N°2: El día 27 de mayo de 2018 a las 14:00 horas aproximadamente, en pasaje Los Jazmines a la altura del N° 740, de la comuna de Quirihue, el acusado JUAN ANTONIO LOYOLA VASQUEZ, conducía el vehículo marca Nissan, PPU TZ-8228, siendo fiscalizado por personal policial, quienes constataron su fuerte halito alcohólico e incoherencia al hablar.

Al revisar el vehículo que conducía el acusado, carabineros encontró en su interior 04 cartuchos de escopeta marca TEC, color azul, calibre 12 mm.

No fue posible practicar el examen respiratorio ni de sangre, debido a que el acusado LOYOLA VASQUEZ se negó injustificadamente a ello.”

A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos configuran los siguientes delitos; HECHO N°1: **conducción en estado de ebriedad**, previsto y sancionado en el artículo 196 inciso 1º de la Ley de Tránsito N° 18.290; HECHO

Nº2: **conducción en estado de ebriedad**, previsto y sancionado en el artículo 196 inciso 1º de la Ley de Tránsito Nº 18.290; **negativa injustificada a practicarse examen de alcoholemia** previsto y sancionado en el artículo 195 BIS de la Ley de Tránsito Nº 18.290; y **porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos**, figura prevista y sancionada en el artículo 9º de la Ley de Control de Armas Nº 17.798; en grado de **consumados**, correspondiéndole al acusado participación en calidad de **autor**.

Agrega que concurre la circunstancia agravante del artículo 12 Nº16 del Código Penal.

Por lo anterior, el Ministerio Público requiere se imponga al acusado **JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ** por el delito de conducción en estado de ebriedad cometido el 06 de mayo de 2018, la pena de **540 días** de presidio menor en su grado mínimo; **multa** de 10 unidades tributarias mensuales y la **cancelación de la licencia de conducir**; por el delito de conducción en estado de ebriedad cometido el 27 de mayo de 2018, la pena de **540 días** de presidio menor en su grado mínimo; **multa** de 10 unidades tributarias mensuales y la **cancelación de la licencia de conducir**; por el delito de negativa injustificada a practicarse examen de alcoholemia, **multa** de 10 unidades tributarias mensuales; y por el delito de porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos la pena de **3 años** de presidio menor en su grado medio; más las penas **accesorias**, el **comiso** de las especies incautadas y al pago de las **costas** de la causa.

TERCERO: *Alegatos.* En su apertura, el Ministerio Público ratificó su acusación y pidió la condena, ofreciendo probar los hechos en ella expuestos, los que reitera. Declararán los funcionarios del procedimiento y se incorporará la alcoholemia. En el segundo hecho inco no fue posible realizar el examen respiratorio ni la alcoholemia, por la negativa del imputado.

En la clausura estimó probados los hechos, no obstante el reconocimiento de la defensa. Los manejos en estado de ebriedad y la negativa a la alcoholemia están acreditados con las pruebas que repasa. Los dichos de la médico ratifican lo expuesto por los funcionarios de Carabineros. Dada la proximidad temporal de los delitos y la circunstancia de que el encartado ya fue condenado anteriormente por hechos similares, pide las penas solicitadas en la acusación, incluso la cancelación de la licencia de conducir. Se probó el porte de las municiones. Están los dichos del funcionario policial señor Jara, quien encontró los cartuchos al revisar el vehículo. Labrín, a su vez, los fijó en fotografías. El perito Tapia detalló de qué se trataba. Loyola no cuenta con autorización para portar dichas municiones. La defensa dice que el artículo 5 de la ley se refiere a autorización para tener o portar armas, no municiones, pero el artículo 9 letra c) de la ley pide que se cuente con la inscripción del art 5, no que la munición se inscriba. El artículo 171 del Reglamento en su letra a), limita la adquisición y tenencia de municiones a personas que posean armas inscritas a su nombre para fines de defensa, caza o deporte, de manera que, como explica el autor Gonzalo Bascur Retamal en su obra Política Criminal, volumen 12, Nº 23, de julio de 2017, páginas 552 y 553, las municiones o cartuchos necesarios para la operación un arma de fuego, éstas sólo pueden adquirirse o poseerse por personas que cuenten con la respectiva autorización sobre armas de fuego, esto es si se tiene un arma inscrita se puede tener la correspondiente munición, esto queda de manifiesto en el propio oficio de la Dirección General de Movilización Nacional. La supuesta falta de antijuricidad material no puede ser admitida, ello sería admitir que la ley establece el porte de municiones como delito independiente del de porte del arma de fuego, y además significaría desconocer el carácter de peligro abstracto que le ha dado la ley, en virtud del cual se castiga el crear riesgo para un número indeterminado de personas. Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en

sentencia de fecha 4 de junio de 2019. El propio acusado, por lo demás, demostró saber que lo que guardó eran municiones. Pide la condena.

Replicando, dice que 1) respecto de la falta de registro legal, este no es el caso de importador ni minero ni industrial, es una persona natural y no hay tal vacío, ya que el 171 del Reglamento es claro en cuanto a que solo pueden adquirirse y poseerse municiones por personas que cuenten con la respectiva inscripción o autorización de armas de fuego, por lo que la sanción del artículo 9 se refiere al que posee o porta municiones sin tener inscrita el arma correspondiente a esas municiones. Por ello el Oficio de la Dirección dice escopeta, y estas municiones eran de escopeta según el perito. 2) los hechos de la acusación son una descripción fáctica de la conducta desplegada que se ajusta a un tipo penal específico, y ella se ajusta al porte de los elementos, y al formalizar y acusar por la tenencia ilegal no cabe duda que aquella descripción fáctica se ajusta perfectamente a la conducta descrita en el artículo de la ley.

La defensa, en su apertura, expresó que no controvierte lo delitos de manejo en estado de ebriedad ni la negativa a practicar la alcoholemia, pero sí debatirá acerca de la concurrencia del delito de porte ilegal de cartuchos, porque no se configura en este caso ese tipo penal, por dos razones: 1) el artículo 9 de la ley de Control de Armas exige, para que se configure el delito, que se posean, tengan o porten los respectivos elementos sin las autorizaciones correspondientes, lo que no se cumple en el presente caso toda vez las disposiciones legales no exigen esa obligación para portar cuatro cartuchos, y el reglamento de la ley sólo regula eventuales registros para municiones en ámbitos específicos como mineros, industriales, comerciales o importaciones, pero no así para cuatro cartuchos. La historia fidedigna de la ley indica que se buscó prohibir la puesta en riesgo de la seguridad pública. 2) hay falta de juridicidad, ya que la presencia de los cuatro cartuchos era prácticamente accidental, toda vez que, como declaró durante la investigación, el encartado los encontró botados y los recogió para impedir un mal mayor, y no tiene armas de fuego.

En la clausura, se mantuvo en sus argumentaciones, y en cuanto al delito de porte ilegal pide absolver porque la conducta adolece de falta de antijuricidad material o lesividad concreta. Según la historia fidedigna de ley y su Reglamento, su finalidad fue velar por evitar alteraciones del orden público, atentados contra la autoridad, velar por la seguridad pública y evitar que la población se arme para cometer otros delitos. No es el caso del encartado. Encontró los cartuchos en un paradero., y en una actitud responsable o solidaria retira de circulación las municiones para luego deshacerse de ellas, llevándolas en el vehículo, y por olvido quedaron allí hasta el momento de la detención. Las municiones requieren de un elemento percutor, una escopeta, y él no la posee, no encontraron armas en su casa. Ello da veracidad a sus dichos. Como segundo punto, no hay un registro para tener o portar municiones. El Reglamento establece registros para municiones respecto de comerciantes e importadores, mineros o industriales, no para pequeñas cantidades. Podría tratarse de un vacío legal. El Oficio de la Dirección se refiere a posesión de alguna escopeta calibre 12, y no de municiones. No se cumple el requisito de punibilidad, y así lo ha señalado la jurisprudencia. Cita sentencias del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Debe der absuelto en el delito de la ley de armas porque: 1) la acusación no emplea ninguno de los verbos rectores del artículo 9, no atribuye el acusado ninguno de ellos; 2) tampoco se señala en la acusación que los cuatro cartuchos hayan estado en el vehículo sin la autorización respectiva. Los hechos así descritos no importan tipo penal alguno. Así, se vulneraría el principio de congruencia en caso de condena, y cita jurisprudencia al respecto.

Replicando expresa que la acusación debe ser precisa y contener los hechos imputados, debe contener a lo menos el verbo rector y las condiciones objetivas de punibilidad.

CUARTO: *Autodefensa del acusado.* Que el encartado, debidamente informado de los cargos formulados en su contra y en presencia de su abogado, renunció a su derecho a guardar silencio y manifestó lo siguiente:

Se negó a la alcoholemia porque estaba ebrio, andaba mal. Las municiones las halló botadas en el camino a Cauquenes, en la garita El Alamo, que es para que la gente espere los buses. Sabía que eran municiones, por eso las guardó en el auto para botarlas a la basura, y olvidó bajarlas. Pide disculpas por el manejo en estado de ebriedad. Ha cambiado, tiene trabajo y dos niños menores de edad.

QUINTO: *Convenciones probatorias.* Que los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

SEXTO: *Pruebas del Ministerio Público.* Que la Fiscalía se ha valido en este juicio de las siguientes pruebas:

TESTIMONIAL:

Marcelo Eduardo Jara Vásquez, carabinero jubilado. Estaba de servicio en Quirihue y detuvo a Juan Antonio Loyola Vásquez en dos oportunidades. La primera vez fue el 6 de mayo de 2018; a las 2:10 horas, mientras patrullaban en calle Maipú, vieron un vehículo marca Nissan de color blanco que iba a muy baja velocidad, y al acercarse ellos a fiscalizarlo advirtieron que el conductor tenía fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar. Una vez en la Unidad policial se le practicó el examen respiratorio, arrojando un resultado de 2,07 gramos por mil, y en el hospital se realizó la alcoholemia. Manejaba ebrio. Dio cuenta de los hechos al Fiscal. Después, el 27 de mayo del mismo año, estando de servicio, a las 14: 10 horas, el suboficial de guardia recibió un comunicado telefónico que informaba que desde Cauquenes hacia Quirihue circulaba un vehículo marca Nissan blanco en forma zigzagueante. Se apostó a la salida norte de Quirihue, y efectivamente venía el vehículo, no obedeció las señales de detención y entró a la ciudad. Lo siguieron, y el móvil frenaba y aceleraba, obstruía la calzada, entró a un pasaje y se detuvo frente al N° 740. Se bajaron y se percataron que el conductor estaba ebrio. En esta ocasión estaba no podían esposarlo, cayeron al suelo y lo redujeron. Su conviviente María Roa Vera iba como acompañante en el vehículo en las dos ocasiones. Se negó a la alcoholemia. En la puerta derecha del automóvil había cuatro municiones, que el Fiscal ordenó incautar. Después tomó declaraciones a ambos ocupantes del vehículo. El imputado manifestó que ese día concurre a Calquín a visitar a familiares y bebió dos botellas de cerveza, había comido poco y se embriagó. Se fue manejando a Quirihue y se encontró con ellos, negándose a practicar la prueba respiratoria y la alcoholemia debido a su embriaguez. La conviviente, a su vez, expresó que a él le gusta manejar y cuando ingiere alcohol cambia de personalidad, ella le dijo que no manejara pero lo hizo; en el viaje quiso fumar pero se le cayó el cigarro cuando manejaba, perdió el control del vehículo y detrás de ellos iban varios otros móviles, y al ingresar a Quirihue se dieron cuenta que ellos esperaban en el lugar y en lugar de parar aceleró. Después le correspondió realizar un ingreso voluntario al domicilio del acusado, dispuesto por el señor Fiscal, en busca de armas y más municiones, pero nada se encontró. Las municiones estaban en el auto, en el habitáculo de la puerta delantera derecha, eran cuatro cartuchos marca TEC de color azul, calibre 12. Preguntado el imputado, dijo que esas municiones las había encontrado en un paradero de locomoción colectiva del camino a Cauquenes hacía como dos meses, y las dejó en el auto. Dijo estar arrepentido de negarse a la alcoholemia. La conviviente y él manifestaron que en su casa no había armas, y él agregó que no se dedicaba a la caza.

Erwin Matías Carreau Bravo, cabo segundo de Carabineros. Cuando trabajaba en Quirihue, el 6 de mayo de 2018, estaba de patrullaje en compañía de dos colegas. Transitaban por calle Maipú hacia el oriente, y al llegar a Las Heras iba un vehículo blanco a baja velocidad, y lo fiscalizaron. El conductor era Juan Loyola Vásquez, quien estaba ebrio, con hálito alcohólico, rostro congestionado e inestabilidad al caminar. Lo detuvieron por flagrancia. Llevado a la Unidad, el alcotest arrojó un resultado de 2,07 gramos por mil. En el hospital se realizó la alcoholemia. Se dio cuenta al Fiscal.

Andrea Villarroel Barrios, médico. El año 2018 atendió en Urgencia del hospital de Quirihue al acusado para constatar lesiones y realizar alcoholemia. Estaba en un estado agresivo, y rechazó la alcoholemia.

Sebastián Andrés Tapia Barría, perito balístico forense de Labocar, sargento primero. Examinó 4 cartuchos de caza calibre 12 TEC, los que estaban compuestos vaina de plástico, cierre de pliegue tipo estrella, culote metálico y carga de proyectiles múltiples del tipo perdigón, diseñado para escopetas. Exteriormente estaban en bien estado de conservación, y no tenían señales de percusión en su cápsula iniciadora. Se probó su aptitud disparando dos de ellos con una escopeta de cargo de la sección, recuperando las vainas. Concluye que estaban aptos para el disparo, sujetos a la ley de control de armas. Se le exhiben y reconoce los dos cartuchos y las dos vainas.

El testigo **Juvenal Humberto Labrín Fuentes**, cabo primero de Carabineros. Trabajaba en Quirihue y el 27 de mayo de 2018 intervino en un procedimiento por manejo en estado de ebriedad y tenencia ilegal de municiones. Tomó fotografías, y se le exhiben 4, reconociendo en ellas el automóvil Nissan V16 de color blanco, y los cartuchos en la puerta del mismo.

PERICIAL: Informe de alcoholemia N° 6516-2018, de 30 de mayo de 2018, realizado por el perito químico farmacéutico del Servicio Médico Legal de Concepción don Marco Antonio Carrasco Grilli, correspondiente al acusado, el que arrojó un resultado de 2,47 por mil.

DOCUMENTAL: 1) Documento de atención de urgencia N° 971805, de 6 de mayo de 2018, del hospital de Quirihue, correspondiente al encartado, que señala diagnóstico de alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado.

2) Documento de atención de urgencia N° 9999491, de fecha 7 de mayo de 2018, del hospital de Quirihue, correspondiente al encartado, que señala como diagnóstico paciente en estado de ebriedad, agresivo, no permite alcoholemia.

3) Oficio N° 2345/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, emitido por la Dirección General de Movilización Nacional, el que indica que el encartado no tiene armas inscritas a su nombre ni permiso para portarlas.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Cuatro fotografías del sitio del suceso y las especies incautadas, correspondientes al hecho N°2 de la acusación.

SÉPTIMO: *Prueba de la defensa.* Que la defensa no rindió otras pruebas que las aportadas por el Ministerio Público.

OCTAVO: *Veredicto.* Que este tribunal, apreciando las probanzas incorporadas al juicio con libertad, sin contravenir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ha concluido lo siguiente:

HECHO N°1:

El día 06 de mayo de 2018, en la intersección de calle Maipú y Las Heras, de la comuna de Quirihue, JUAN ANTONIO LOYOLA VASQUEZ, conducía el vehículo marca Nissan, PPU TZ-8228, momentos en que fue fiscalizado por personal policial, quienes constataron su fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar y rostro congestionado.

Practicado el examen de alcoholemia de rigor, arrojó como resultado que LOYOLA VASQUEZ conducía en estado de ebriedad con 2,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

HECHO N°2:

El día 27 de mayo de 2018, en el pasaje Los Jazmines a la altura del N° 740, de la comuna de Quirihue, JUAN ANTONIO LOYOLA VASQUEZ, conducía el vehículo marca Nissan, PPU TZ-8228, siendo fiscalizado por personal policial, quienes constataron su fuerte hálito alcohólico e incoherencia al hablar.

No fue posible practicar el examen respiratorio ni de sangre, debido a que LOYOLA VASQUEZ se negó injustificadamente a ello.

Los hechos referidos como N°1 constituyen el delito de **conducción en estado de ebriedad**, previsto y sancionado en el artículo 196 inciso 1° de la Ley de Tránsito N°18.290. Por otra parte, los hechos descritos como N°2 constituyen los delitos de **conducción en estado de ebriedad**, previsto y sancionado en el artículo 196 inciso 1° de la Ley de Tránsito N° 18.290, y el de **negativa injustificada a practicarse examen de alcoholemia**, previsto y sancionado en el artículo 195 bis de la Ley de Tránsito N° 18.290. Los referidos delitos se encuentran en grado de **consumado**, correspondiéndole en los mismos al acusado participación en calidad de **autor**, al haber intervenido en sus ejecuciones de una manera inmediata y directa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Que, por otra parte, la prueba de cargo careció del mérito suficiente para acreditar la existencia del supuesto delito de **porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos**, contenido en hecho N°2 de la acusación, y que en él hubiere correspondido al acusado JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ una participación culpable y penada por la ley, motivo por el cual se desestima la pretensión del Ministerio Público en orden a condenarlo como autor del referido delito; fundado en que nadie puede ser condenado sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere el convencimiento, más allá de toda duda razonable, de que realmente se cometió el hecho punible objeto de la acusación y que en él ha tenido el acusado una participación culpable y penada por la ley.

En consecuencia, la presente sentencia será **condenatoria** para el acusado **JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ** por dos delitos de conducción en estado de ebriedad y por el delito de negativa injustificada a practicarse el examen de alcoholemia, y **absolutoria** por el delito de porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos.

NOVENO: *Valoración de la prueba y calificación jurídica.* Que en lo que atañe al delito de conducir en estado de ebriedad cometido el día 6 de mayo de 2018, está acreditado con lo declarado por el funcionario Jara Vásquez, en cuanto señaló que ese día a las 2:10 horas, mientras patrullaban en calle Maipú, vieron un vehículo marca Nissan de color blanco que iba a muy baja velocidad, y al acercarse ellos a fiscalizarlo advirtieron que el conductor tenía fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar; que en la Unidad policial se le practicó el examen respiratorio, arrojando un resultado de 2,07 gramos por mil, y en el hospital se realizó la alcoholemia. El imputado manejaba ebrio.

También se contó con lo manifestado por el funcionario de Carabineros Carreau Bravo, en cuanto expresó que ese día estaba de patrullaje en compañía de dos colegas, que cuando transitaban por calle Maipú hacia el oriente, al llegar a Las Heras iba un vehículo blanco a baja velocidad, y lo fiscalizaron; que el conductor era Juan Loyola Vásquez, quien estaba ebrio, con hálito alcohólico, rostro congestionado e inestabilidad al caminar, y llevado a la Unidad el alcotest arrojó un resultado de 2,07 gramos por mil, y en el hospital se realizó la alcoholemia.

La Hoja DAU del imputado fue incorporada como documental y en ella se expresa diagnóstico de alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado.

El informe de alcoholemia, a su vez, incorporado como pericial, arrojó un resultado de 2,41 gramos por mil.

Que en lo que atañe al delito de conducir en estado de ebriedad perpetrado el día 27 de mayo de 2018, se ha contado a su vez con lo declarado por el señor Jara Vásquez, en cuanto señaló que ese día, a las 14: 10 horas, el suboficial de guardia recibió un comunicado telefónico que informaba que desde Cauquenes hacia Quirihue circulaba un vehículo marca Nissan blanco en forma zigzagueante; que se apostó en la salida norte de Quirihue, y efectivamente venía el vehículo, cuyo conductor no obedeció las señales de detención y entró a la ciudad; que lo siguieron, y el móvil frenaba y aceleraba, obstruía la calzada, entró a un pasaje y se detuvo frente al N° 740; que se bajaron y se percataron que el conductor estaba ebrio, y lograron reducirlo, negándose a la alcoholemia; agrega que el imputado iba en compañía de su conviviente, y tomó declaraciones ambos, señalando el conductor que ese día concurrió a Calquín a visitar a familiares y bebió dos botellas de cerveza, había comido poco y se embriagó, se fue manejando a Quirihue y se encontró con ellos, negándose a practicar la prueba respiratoria y la alcoholemia debido a su embriaguez. La conviviente, a su vez, expresó que al imputado le gusta manejar y cuando ingiere alcohol cambia de personalidad, ella le dijo que no manejara pero lo hizo.

Corroborar lo anterior lo manifestado por la médico Andrea Villarroel Barrios, en cuanto a que el acusado se negó al examen de alcoholemia; lo mismo que expresa la Hoja DAU incorporada.

Que respecto al delito de negativa injustificada a practicarse el examen de alcoholemia y la participación que en calidad de autor ha correspondido en el mismo al encartado, han quedado plenamente establecidos con los medios de prueba consistentes en los dichos del funcionario policial señor Jara Vásquez, la médico Villarroel Barrios y la Hoja DAU, ya reseñados, todos los cuales dan cuenta que en la oportunidad del 27 de mayo de 2018, el enjuiciado se negó sin dar razón alguna a practicar el examen de alcoholemia.

De esta manera han quedado acreditados, más allá de toda duda razonable, la existencia de los dos delitos de conducir en estado de ebriedad y del de negativa injustificada a practicar el examen de alcoholemia de que se trata, como asimismo la participación que en calidad de autor ha cabido al acusado en los mismos; extremos que, por lo demás, han sido reconocidos tanto por la defensa como por el propio encartado al renunciar a su derecho a guardar silencio. De esta manera, no cabe otra cosa que condenarlo por tales ilícitos.

DECIMO: *Consideraciones acerca de la absolución.* Que, como se ha dicho, se absolverá al acusado en lo que respecta al delito de porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos, por el cual también se le ha acusado.

Para así resolver debe tenerse en consideración que por aplicación del denominado principio de congruencia, contemplado en nuestro sistema en el artículo 341 del Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, por lo que no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Tal principio es una exigencia legal y constituye una garantía y un reflejo del derecho de defensa, en cuanto se requiere que la imputación del acusador sea precisa y determinada.

En el presente caso la acusación respecto del delito que nos ocupa señala textualmente lo siguiente, después de describir los hechos constitutivos del delito de conducción en estado de ebriedad acaecido el día 27 de mayo de 2018: “Al revisar el vehículo que conducía el acusado, carabineros encontró en su interior 04 cartuchos de escopeta marca TEC, color azul, calibre 12 mm.” El hecho así tan escuetamente descrito es atípico, al no contener en su totalidad de los elementos del delito que se pretende imputar, como sería, por ejemplo, la circunstancia de que el imputado careciere de las autorizaciones exigidas para tener o para portar tales elementos. Tampoco se emplea en la descripción fáctica ninguno de los verbos rectores del tipo penal que se pretende imputar.

De esta manera, no es posible condenar al encartado por tal hecho que resulta a todas luces atípico, y debe necesariamente dictarse sentencia absolutoria a su respecto; siendo del todo inoficioso hacerse mayor cargo de las alegaciones y probanzas incorporadas a su respecto.

UNDÉCIMO: *Audiencia de determinación de pena.* La defensa alegó la concurrencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, fundada en que el acusado declaró y admitió responsabilidad en la investigación y en el juicio, y está arrepentido en el delito de negativa injustificada a la alcoholemia. Pide compensar esa atenuante con la agravante que alegará el Ministerio Público, y aplicar el mínimo de la penas por ambos manejos en estado de ebriedad, 61 días de presidio por cada uno, y multa de tres unidades tributarias mensuales por la negativa a la alcoholemia. Pide eximir de costas por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública. Pide la pena sustitutiva de reclusión nocturna. Incorpora peritaje social emanado de María Larrañaga Gutiérrez relativo a su arraigo familiar, social y laboral, el que concluye que el encartado cumple con redes sociales funcionales.

La fiscalía se opone a la atenuante del 11 N°9, toda vez que estima que no hay colaboración sustancial. El delito de negativa injustificada a practicarse la alcoholemia pugna fuertemente con la consideración de esa minorante. Insiste en la concurrencia de la agravante prevista en el artículo 12 N°16 del Código Penal. Incorpora al efecto el extracto de filiación, que registra condenas, copias de las respectivas sentencias de causas RIT 66-2014 566-2013, ambas por manejar en estado de ebriedad, del Juzgado de Garantía de Quirihue. Pide las penas solicitadas en la acusación.

Incorpora las sentencias. La correspondiente a la causa RIT 66- 2014, de fecha 4 de julio de 2014, delito cometido el 15 de diciembre de 2013, y la de la causa RIT 566- 2014, por delito perpetrado el 12 de junio de 2013.

DUODÉCIMO: *Consideraciones sobre modificatorias.* Que será rechazada la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal. El acusado no ha colaborado en forma sustancial al esclarecimiento de los hechos. Si bien renunció a su derecho a guardar silencio y reconoció los hechos, ello dista de ser de gran importancia y entidad, toda vez que aun sin contar con sus dichos igualmente resultarían establecidos tanto los hechos como su participación.

Que efectivamente concurre, agravando la responsabilidad del encartado en los dos delitos de conducción en estado de ebriedad, la circunstancia agravante contemplada en el artículo 12 N°16 del Código Penal, esto es, la de ser reincidente en delito de la misma especie. En efecto, se encuentra acreditado, con el mérito del extracto de filiación y las copias de sentencias incorporadas, que fue condenado anteriormente por el Juzgado de Garantía de Quirihue en causas RIT 566-2013 y Rit 66-2014, de fechas 4 de julio de 2014, por sendos delitos de manejo en estado de ebriedad cometidos con fechas 12 de junio de 2013 y 15 de diciembre del mismo año.

DÉCIMOTERCERO: *Penalidad en abstracto.* Que la pena corporal asignada al delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad es un grado de una divisible, y concurriendo en la especie una circunstancia agravante y ninguna atenuante, no puede aplicarse en su mínimun; y tratándose de reiteración de delitos de una misma especie, al acusado le es más conveniente ser condenado a una pena única, conforme al sistema señalado en el artículo 351 del Código Procesal Penal, aumentando la pena resultante para cada uno de los delitos en un grado, por resultarle de tal manera una pena inferior a la que le correspondería de seguir el procedimiento indicado en el artículo 74 del Código Penal.

A su vez, el delito de negativa injustificada a la alcoholemia tiene asignada una pena de multa, la cual, por no concurrir atenuantes ni agravantes, se aplicará en el mínimun.

DÉCIMOCUARTO: Costas. Que, no se condenará en costas al sentenciado al haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 12 N° 16, 14 N° 1, 15 N° 1, 30, 67, 69 y 70 del Código Penal, y 47, 48, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 y 351 del Código Procesal Penal, 110 inciso segundo y 196 de la Ley N° 18.290, **se declara:**

I.- Que **SE ABSUELVE** a **JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ**, ya individualizado, de la acusación formulada por el Ministerio Público, en cuanto lo suponía autor del delito de porte o tenencia ilegal de municiones o cartuchos, supuestamente cometido en la comuna de Quirihue el día 27 de mayo de 2018.

II.- Que **SE CONDENA** al ya referido **JUAN ANTONIO LOYOLA VÁSQUEZ** a las siguientes penas, por los conceptos que se indican:

a) Como autor de dos delitos consumados de **conducir en estado de ebriedad** cometidos en la comuna de Quirihue los días 6 y 27 de mayo de 2018, a la **pena única** de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS** de presidio menor en su grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, al pago de una multa de **seis unidades tributarias mensuales** y a la **cancelación de la licencia de conducir o a la inhabilidad perpetua** para obtenerla en su caso.

b) Como autor del delito de **negativa injustificada a practicar el examen de alcoholemia**, cometido en la comuna de Quirihue el día 27 de mayo de 2018, al pago de una multa de **tres unidades tributarias mensuales**, y con la **suspensión de la licencia de conducir** por un mes.

Se conceden facilidades para el pago de las multas impuestas, consistentes en **doce mensualidades** iguales y sucesivas, conforme al valor que la unidad tributaria mensual tenga al momento de cada pago.

Si el sentenciado no cumpliera con el pago de las multas impuestas, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión; regulándose ésta en un tercio por cada unidad tributaria a la que ha sido condenado, sin que ella pueda exceder de seis meses.

III.- No reuniéndose en la especie los requisitos exigidos por la ley N° 18.216 para concederle alguna pena sustitutiva, en especial la de reclusión nocturna solicitada por la defensa, el sentenciado deberá cumplir en forma efectiva la pena corporal impuesta, ejecutoriada que sea este fallo, desde que se presente al efecto o sea habido, sin abonos por no constar ninguno del auto de apertura de juicio oral.

IV.- Que no se condena en costas al sentenciado al haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

En su oportunidad, devuélvase a los intervinientes los medios de prueba y antecedentes incorporados al juicio.

Atendido lo dispuesto en los artículos 14 letra f) y 113 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 468 del Código Procesal Penal, una vez ejecutoriado el fallo, remítanse los antecedentes necesarios al Juez de Letras y Garantía de Quirihue, para la ejecución de la pena.

Además, en su oportunidad, si procediere, dese cumplimiento a lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 18.556, modificada por la Ley 20.568.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el juez Oscar Ruiz Paredes.

RUC: 1800518384-3

RIT: 50 - 2020

Pronunciada por la **Segunda Sala** del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, integrada por los Jueces Titulares, **MARIA PAZ GONZÁLEZ**

GONZÁLEZ, Presidenta de la Sala, **JORGE MUÑOZ GUÍÑEZ** y **OSCAR RUIZ PAREDES**.

Con esta fecha se notificó por el estado diario la resolución precedente.
Chillán, 3 de mayo de 2021.